

La democracia a prueba

Los años que votamos en pandemia en las Américas

Cintia Pinillos, Esteban Iglesias,
Juan Bautista Lucca y Osvaldo Iazzetta (Comps.)



La democracia a prueba

La democracia a prueba: los años que votamos en pandemia en las Américas / Osvaldo Iazzetta ... [et al.]; compilación de Cintia Pinillos ... [et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO ; Rosario : UNR Editora, 2022.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-093-4

1. Elecciones. 2. Pandemias. I. Iazzetta, Osvaldo. II. Pinillos, Cintia, comp.

CDD 324.6098

Arte de tapa: Ramiro López Crespo

Diseño interior: Eleonora Silva

La democracia a prueba

Los años que votamos en pandemia en las Américas

**Cintia Pinillos, Esteban Iglesias,
Juan Bautista Lucca y Osvaldo Iazzetta
(Comps.)**





CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory - Gestión Editorial

Nicolás Sticotti - Fondo Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

La democracia a prueba: los años que votamos en pandemia en las Américas (Buenos Aires: CLACSO, febrero de 2022).

ISBN 978-987-813-093-4



CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | clacso@clacsoinst.edu.ar |

www.clacso.org



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

Introducción	11
<i>Oswaldo Iazzetta</i>	
Agradecimientos	27
América Latina 2020-2021: votos y jueces en tiempos de pandemia.....	29
<i>Manuel Alcántara Sáez</i>	
Elecciones en pandemia, contra viento y marea.....	59
<i>Oswaldo Iazzetta</i>	
Nuevo espacio político en Bolivia. Entre lo nacional popular y lo oligárquico liberal.....	75
<i>Fernando Mayorga</i>	
Bolivia junto, contra y MAS allá de Evo.....	103
<i>Esteban Iglesias y Melisa Argento</i>	
Elecciones locales en Brasil. Pandemia, nuevas reglas y avance de la derecha	125
<i>Oswaldo E. do Amaral y Otávio Z. Catelano</i>	

Elecciones y pandemia como “justo medio” de la radicalización bolsonarista.....	139
<i>Gisela Pereyra Doval y Emilio Ordoñez</i>	
Chile: los desafíos de un histórico proceso político en tiempos de pandemia.....	157
<i>Claudia Heiss</i>	
La agenda de la transición y el ciclo electoral hacia una Constitución en Chile.....	181
<i>Cintia Pinillos</i>	
Trump: polarización y populismo.....	199
<i>Carlos de la Torre</i>	
Elecciones y pandemia en Estados Unidos (2020). La derrota de Donald Trump y el triunfo del trumpismo.....	223
<i>Gastón Souroujon y Juan Bautista Lucca</i>	
Elecciones en pandemia: México.....	247
<i>Karolina Monika Gilas y Cecilia Aida Hernández Cruz</i>	
Cambio o continuidad en la elección de 2021 en México. ¿MORENA aprendió (o no) a navegar sin Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia?.....	263
<i>Jaime Aragón Falomir</i>	
Crisis sanitaria y política. Paraguay va a las urnas	291
<i>Marcos Pérez Talia</i>	
Reforma electoral y elecciones municipales en contexto de pandemia en Paraguay	307
<i>Celeste Gómez Romero</i>	

La urna no se mancha... pero se contagia. Una puesta a punto de las elecciones departamentales de 2020 en Uruguay.....	323
<i>Antonio Cardarelo</i>	
COVID-19 y elecciones subnacionales en Uruguay. Explorando efectos sobre el nivel de participación electoral.....	343
<i>Federico Acosta y Lara y Diego Luján</i>	
Sobre los autores y autoras.....	361

Bolivia junto, contra y MAS allá de Evo

Esteban Iglesias y Melisa Argento

Introducción

La transformación política impulsada por el Movimiento al Socialismo [MAS] desde su llegada al poder en 2005 supo articularse y consolidar su hegemonía a partir del apoyo de diversas estructuras del conflicto preexistentes –sindicatos, federaciones regionales– y de la configuración de nuevas bases organizacionales que nacieron ligadas a esta fuerza política. Emergente y resultante de un verdadero ciclo de rebelión social antineoliberal (2000-2005), Evo Morales llegó al poder mediante la articulación de las expectativas de un conjunto de actores, y recuperó las propuestas del Pacto de Unidad hacia la Asamblea Constituyente, como punto de inicio de un proceso que se pretendió *refundacional*. El MAS se conformó entonces como un partido político e instrumento de los pueblos que, con bases sociales campesinas e indígenas, expandió su hegemonía a las ciudades y logró una escala de apoyos nacional. De acuerdo con Stefanoni, el MAS articuló un programa que “combinaba nacionalismo popular con un indigenismo de geometría variable adecuado a los nuevos tiempos de la reemergencia indígena” (2019).

Las sucesivas gestiones en 2005, 2009 y 2014, consolidadas con un gran respaldo político electoral, se acompañaron de un proceso

de inclusión social por la vía de las políticas sociales,¹ del incremento económico sostenido, de la disminución de las tasas de desempleo urbano –aún con el incremento del trabajo informal– y de las políticas de reconocimiento indígenas, como parte de una impronta desracializadora de las relaciones sociales en este país.

Si bien la hegemonía del MAS comienza a evidenciar serias fisuras desde 2010, con las luchas frente al “gasolinazo”, y más aún en 2011, a partir del conflicto por la construcción de una carretera en la región del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure [TIPNIS], y debe enfrentarse a una oposición política regional que está presente a lo largo de todo el ciclo (recordemos los levantamientos de la denominada Media Luna en 2008), lo cierto es que el año 2016 marca una inflexión en la composición de sectores antimasistas, a partir de lo cual el clivaje oficialismo/oposición se torna el centro gravitacional de la arena política. En este marco, la coyuntura de las elecciones de 2019 y el manto de confusión sobre el cual se desarrollaron provocaron una situación específica que desencadenó en la brutal celeridad propia de la crisis política.

En este sentido, las elecciones de 2019 operaron como contexto de oportunidades del despliegue de actores sociales, políticos, grupos de poder y élites económicas con muy dispares e incluso antagónicas demandas, pero que recuperaban como bandera la defensa de la *democracia* y el respeto de los resultados del 21F, cuando el referendo de 2016 le negó a Morales –por escasos puntos– la posibilidad de ser reelecto. La expansión de las protestas y movilizaciones sociales por más de veinte días, así como la capitalización eficaz de una parte de las demandas por los sectores de la oposición política más conservadora –que, sin embargo, no lograron superar su fragmentación– abonaron, junto al papel de las fuerzas armadas y policiales,

¹ La nacionalización de los hidrocarburos y de las empresas mineras permitió la recaudación impositiva que, en gran medida, permitió el sostenido presupuesto destinado a políticas sociales como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, lo cual impactó en la mejora de las condiciones de vida de amplios sectores populares.

al forzamiento de la renuncia de Evo Morales Ayma. Asimismo, facilitaron la instalación de un golpe de Estado con la autoproclamación de Jeanine Áñez a la presidencia de facto. Un año después, en la realización de nuevos comicios, la fórmula Luis Arce Catacora-David Choquehuanca triunfaba con un importante margen y colocaba al MAS nuevamente en el gobierno. ¿Cómo se explica la desconexión entre el escaso apoyo social en los días de las protestas y el triunfo electoral un año después? Las respuestas son múltiples y tienen diversas temporalidades, donde factores coyunturales conviven con otros de carácter estructural.

Nuestra hipótesis sostiene que el doble movimiento de la transformación sociopolítica desde el aparato del Estado y la eficacia organizativa de las estructuras sociales obreras e indígenas-campesinas que apoyan al MAS explica, junto a la fragmentación de la oposición política, las razones por las que el MAS pudo ganar holgadamente las elecciones generales de 2020.

El *tempo medio* de las fisuras en las bases de apoyo al MAS

Desde el inicio de su primera gestión, el MAS enfrentó políticamente a los sectores de la élite económica o la Media Luna.² La derecha regional actuó con mayor visibilidad hasta los años 2008 y 2009 en la resistencia a las políticas de cariz nacional y popular que impulsaba el oficialismo.

Cuando los enfrentamientos con las élites y con las autoridades de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando se agravaron, el MAS recurrió a la movilización y a la acción callejera de amplios sectores sociales y, fundamentalmente, al Pacto de Unidad, que había sido constituido

² El Comité Pro Santa Cruz junto a los comités cívicos de Beni, Pando y Tarija consolidaron el bloque regional de la Media Luna en la exigencia de las autonomías departamentales, demanda que finalmente fue incorporada en la declaración de la Nueva Constitución y la conformación del Estado Plurinacional (junto con las autonomías indígenas originarias campesinas).

en el año 2004. Conformaban este Pacto la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia [CSUTCB], la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia [CSCB], la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa [CNMCIQB-BS], la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano [CIDOB], el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu [CONAMAQ], la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz [CPESC], el Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierra de Bolivia [MST-B], la Asamblea del Pueblo Guaraní [APG], la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni [CPEMB] y la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento [ANARESCAPYS].

En el marco de esta conflictividad, se crea, en el año 2007, la Coordinadora Nacional para el Cambio [CONALCAM], como una articulación de diferentes organizaciones ligadas al MAS, junto con integrantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y representantes de la asamblea constituyente. Esta Coordinadora fue el principal instrumento de movilización del MAS para, en el año 2008, enfrentar las acciones impulsadas por los prefectos departamentales. Luego de la “Matanza de Pando”, la COB ingresaba también a la Coordinadora. El ingreso de la COB en la CONALCAM signó la articulación de la Central de Obreros con el gobierno durante el primer mandato, a pesar de la conflictividad desatada con el sector cooperativista hacia 2006. Sin embargo, luego de las elecciones de 2009, la conflictividad sindical se expandió, aun por fuera de la voluntad y/o de las decisiones dirigenciales (Schneider, 2020). Estas decisiones fueron en relación con el código de Trabajo en el año 2010 y en relación con el decreto que incrementaba considerablemente el precio de los combustibles, lo cual despertó la movilización que se dio a conocer como el “gasolinazo” y que constituyó un punto de inflexión en torno al cual el gobierno debió dar marcha atrás con la decisión. En los años siguientes, diversos sectores sostuvieron paros, marchas y acciones para exigir mejoras salariales. No obstante, en términos generales, la dirigencia de la central optó por estrategias y/o posicionamientos de

negociación, mientras sus afiliados y trabajadores exigían una mayor autonomía sindical por parte de una central con una gran trayectoria de lucha, al menos, claramente, hasta los años ochenta. En este sentido, las situaciones de mayor conflictividad estuvieron dadas por las disputas en torno al carácter de la nacionalización de las minas y el control estatal, en el enfrentamiento entre trabajadores mineros asalariados y cooperativistas o capitalistas privados.³

Ahora bien, la expansión hegemónica del MAS,⁴ la aparente desarticulación del enfrentamiento regional (dado que la Nueva Constitución reconocía finalmente las autonomías departamentales), el crecimiento como fuerza política y el renovado apoyo electoral no deben ocultar que, a partir del segundo mandato, se inició una progresiva erosión y reconfiguración de las bases de apoyo al gobierno. Esta situación encuentra su explicación en la tensión estructural entre una matriz nacional y popular de gobierno y la expansión de políticas de carácter neoextractivista, signadas por el incremento de las exportaciones de materias primas –fundamentalmente de hidrocarburos y minería– (Gandarillas, 2016) en el marco del alza en los precios internacionales del ciclo del “consenso de los *commodities*” (Svampa, 2013). Este esquema le permitió al MAS evitar el fantasma inflacionario y sostener un crecimiento económico en el orden promedio del 5% entre los años 2006 y 2014, que fue observado entre sus principales logros por un conjunto de gobiernos latinoamericanos y por la propia CEPAL.

Pese a declarar un perfil industrialista, el peso del sector primario en la estructura económica siguió siendo central. A su vez, la balanza superavitaria del gobierno perduró de manera sostenida hasta el año 2015 en la profundización de un modelo rentista y en la captación de

³ Como suceso límite, podemos ubicar el linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes por cooperativistas mineros en una localidad cercana a la ciudad de La Paz en el año 2016.

⁴ Entre 2009 y 2014 el MAS logró una clara hegemonía legislativa, obtuvo dos tercios de las bancas en la Asamblea y logró desplazar su representación territorial incluso hacia el oeste, tal y como lo demostraría el triunfo electoral en 2014 en Santa Cruz.

ingresos provenientes de sectores económicos considerados estratégicos por el Estado.⁵ En gran medida, estos ingresos se justificaron con la expansión del gasto fiscal y la transferencia de recursos para políticas sociales –Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, la Renta Dignidad– y políticas de vivienda, industria y generación de empleo, sobre todo en los rubros de construcción, comercio y servicios, entre otros. Por otra parte, el agronegocio se expandió, sobre todo localizado en el departamento de Santa Cruz, lo cual amplió la frontera agrícola hacia zonas antes consideradas “improductivas”, por medio de diversas campañas de desforestación.⁶

El estímulo inicial al proceso de nacionalización de los hidrocarburos y el control estatal sobre la minería acabó por transmutar en procesos de fuerte endeudamiento externo y en el fortalecimiento del capital privado, en la mediana y gran minería, en manos de las transnacionales, así como en la expansión de las cooperativas mineras.

Las tensiones con el gobierno y en el seno de la CONALCAM estallaron durante el conflicto de TIPNIS y frente a la decisión gubernamental de construir una autopista bioceánica en esa área de Parque Nacional, reconocida, además, como territorio ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas mojeños, yuracaré y chimán. Las manifestaciones del año 2011 fueron protagonizadas por grandes organizaciones como la CIDOB, la CONAMAQ, la Asamblea de Pueblos Guaraní, la Central de Pueblos Indígenas del Beni [CPIB], la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando [CIPOAP], la Central de Mujeres Indígenas del Beni [CMIB], la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia [CIRABO], la Central de Pueblos

⁵ En los cuales fue creciente el endeudamiento externo y/o las licitaciones a firma provenientes de China. Se trató de una política en expansión, fundamentalmente a partir de 2011.

⁶ Desde 2013, el gobierno aprobó varias leyes, decretos y normas técnicas que dieron lugar a la deforestación. Estas medidas de avance territorial se ampliaron con la Ley 741 de 2015, por la que se facultó los desmontes de hasta veinte hectáreas. A su vez, el Decreto Supremo 3.973 de 2019 autorizó las quemas en los departamentos de Santa Cruz y Beni (Schneider, 2020).

Indígenas de La Paz [CPILAP], la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba [CPITCO], la Organización Indígena Chiquitana [OICH] y la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia [CNAMIB]. En este contexto, organizaron la VIII Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS y la Dignidad de los Pueblos Indígenas. Al llegar a La Paz, la marcha contó con el respaldo de un gran conjunto de la población y logró, finalmente, la aprobación de una Ley que declaraba la región como zona intangible. Es en ese año cuando se produce el alejamiento del MAS de la CIDOB y la CONAMAQ, al tiempo que la CSUTCB y la CNMCIQB-BS continuaron con su apoyo al régimen y, de hecho, también con su apoyo a la construcción de la autopista. El conflicto entre organizaciones campesinas e indígenas se hizo más que tangible.

Entre otras movilizaciones opositoras que encuentran sus razones en el mediano *tempo*, pero que coadyuvan a la expansión de las movilizaciones y, fundamentalmente, en el no apoyo que recibe Morales al ser obligado a renunciar, vale mencionar aquí la X Marcha Indígena de los Pueblos Orientales en Defensa de la Chiquitania contra los Desmontes y los Incendios. Pocas semanas antes de las elecciones de octubre de 2019, se produjo el incendio de la Amazonía en Chiquitania. Los trágicos costos para la biodiversidad, así como para las poblaciones, encontraban sus causas en la sanción de la Ley 2.016 y el decreto que pocos meses antes Evo Morales había aprobado, donde autorizaba las “quemadas intencionales”. Por otra parte, los paros cívicos y el pliego de demandas regionales que desde Potosí se repitieron a partir de 2015 se sumaron en la gran movilización de 2019, específicamente en la exigencia de cesar el decreto que conformaba la asociación estatal con la firma alemana ACY Systems para la instalación de una planta de producción de materiales catódicos y baterías de ion-litio (Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes [GyBC], 2019; Argento, Puente y Slipak, 2021). Esta decisión integraba la tercera fase de la política de industrialización del litio con control estatal implementada por el gobierno del MAS desde el

año 2008 (Argento, 2018). Pocos días antes de renunciar, Evo Morales derogaba –producto de la presión social– el decreto.

El referéndum de 2016

La coyuntura política que va desde 2016 a 2018 constituyó un momento de inflexión en la historia política de Bolivia, desde que el MAS asumió el gobierno nacional en 2005. En efecto, esta coyuntura aglutinó un conjunto de situaciones previas y novedosas, así como también procesos políticos de mediano plazo que terminan por describir mayormente lo sucedido con posterioridad a las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019.

A poco más de un año de haber sido electo para su tercer mandato, el gobierno impulsó una estrategia reeleccionista. Para ello, convocó a un referéndum popular para el 21 de febrero de 2016 a fin de obtener el respaldo social que permitiera una nueva candidatura en el año 2019, que le estaba vedada de manera constitucional.⁷ Las campañas para respaldar el *Sí* estuvieron apoyadas por sectores aliados, como la dirigencia en la COB y la CONALCAM. Por su parte, las campañas por el *No* sin dudas expresaban ya la heterogeneidad de la composición de la oposición al gobierno.

Los resultados del referéndum fueron negativos para el MAS y, en particular, para Evo Morales, por un exiguo margen. Porcentualmente, hubo un 51,3% por el *No* y un 48,7% por el *Sí*. Pese a esto, el MAS persistió en la estrategia reeleccionista, ahora por otras vías. De este modo, consiguió que el Tribunal Constitucional Plurinacional

⁷ El artículo 168 de la Constitución limita el ejercicio de la presidencia a dos períodos consecutivos. Si bien el gobierno de Evo Morales inició en 2005, pudo presentarse a los comicios de 2014-2020 con el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional [TCP], bajo el argumento de que Bolivia fue refundada en 2009 con la nueva Constitución.

permita, mediante una sentencia en noviembre de 2017,⁸ la candidatura de Evo Morales a las elecciones generales de 2019.

En este interregno se multiplicaban diversas protestas y cuestionamientos de determinados sectores de la clase media que habitan en los principales centros urbanos, impulsadas fundamentalmente por Comités Cívicos. Dichos Comités consistían en instituciones sociales de carácter multisectorial y ambivalente, conformadas por sectores urbanos, profesionales y trabajadores, que encontraron su canalización y articulación de intereses en fuerzas políticas opositoras cuyo objetivo era la no reelección de Evo Morales. Así, el 10 de octubre de 2017, miles de ciudadanos críticos del MAS marcharon en conmemoración del retorno a la democracia, ocurrido en 1982. Las protestas/conmemoraciones tuvieron lugar en diversos centros urbanos. Las más importantes en términos numéricos fueron las de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí y Oruro. En la visión de los manifestantes, el MAS era colocado como un gobierno y un partido autoritario. El *slogan* de “No a la dictadura” o la condena a la “venezolanización de Bolivia” se mixturaba con una consigna más terrenal y palpable, como la de rechazar la postulación de Evo Morales.

Sumado a esto, en 2017 se desató una nueva ola de protestas como respuesta a la decisión de la Asamblea Plurinacional de aprobar un nuevo Código Penal. El 23 de noviembre, los médicos organizaron acciones y movilizaciones que lograron una alta adhesión social, e involucraron rápidamente a otros sectores sociales y profesionales: periodistas, transportistas, abogados, la iglesia católica, la iglesia evangélica y los Comités Cívicos (*Nodal*, 26/12/2017). Este ciclo de protestas culminó en febrero de 2018 y las intensas movilizaciones llevaron a que Evo Morales derogara el nuevo Código Penal.

Ese mismo mes, se organizó una nueva protesta de alcance nacional contra el gobierno. El motivo era la conmemoración del segundo

⁸ Este órgano dio curso a una demanda presentada por el MAS, mediante la cual se permitiera la reelección indefinida para cargos públicos, que incluía al entonces presidente Evo Morales.

año del referéndum de 2016, donde había triunfado la no reelección de Evo Morales. Fue convocada por gremios, iglesias, Comités Cívicos –como el CONADE [Comité Nacional de Defensa de la Democracia], que había surgido precisamente para oponerse a la aprobación del nuevo Código Penal–, entre otros sectores. Mediante la articulación de un conjunto de actores por los Derechos Humanos, su denominación guardaba una evocación simbólica a un organismo homónimo que surgió frente a la dictadura de Luis García Meza a inicios de los años ochenta. Cabe destacar la expansión de consignas de convocatoria con una fuerte impronta *antipolítica* y la utilización de redes sociales digitales –Whatsapp, Facebook e Instagram– para concretar la asistencia a la movilización. Desde el gobierno, se promovieron contramarchas y movilizaciones de apoyo que trasladaron a las calles el “campo de medición de las fuerzas políticas” (*France 24*, 22/02/2018).

En este escenario, el partido gobernante promulgó en septiembre de 2018 la Ley de Organizaciones Políticas, que reemplazó a la Ley de Partidos Políticos y a la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004. La nueva ley estableció el sistema de elecciones primarias para el cargo a presidente y vicepresidente y funcionó como un acelerador de decisiones de candidaturas frente a los comicios generales de 2019, dado que la presentación de postulaciones concluía en noviembre de 2018 (Zegada, 2020). Esto beneficiaba al MAS, que tenía definidas sus candidaturas, con lo cual pudo presionar las decisiones de los opositores políticos. En el arco opositor, fue Carlos Mesa quien aprovechó de mejor manera esta situación, y eligió como insignia partidaria al Frente Revolucionario de Izquierda, una organización prácticamente sin relevancia que podía tallar a su gusto. Al panorama de la oposición partidaria es necesario agregar, entre los casos más relevantes, las postulaciones de Jaime Paz Zamora, expresidente de una gestión neoliberal entre 1989 y 1993, por el Partido Demócrata Cristiano; de Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente entre 1993 y 1997 y candidato por Unión Cívica Solidaridad; y de una fuerza extraparlamentaria, SOL.Bo, que conformó un frente denominado Comunidad Ciudadana.

De acuerdo con Zegada (2020), los registros de militantes de cada organización política en este momento permiten constatar la singular crisis de los partidos políticos opositores al MAS. El Órgano Electoral Plurinacional [OEP], en octubre de 2018, registraba los números de la militancia nacional inscrita: el MAS tenía un total de 991.092 inscritos, es decir, el 57,7% de la militancia total registrada, seguida por el frente 21F (que agrupaba un conjunto de partidos), el cual contaba con 292.490 militantes (17% del total); mientras los demás partidos estaban por debajo de los 100.000 militantes y no trascendían el 6% del total de militantes inscritos (Zegada, 2020).

Las elecciones de octubre de 2019, entre la desconfianza y los errores políticos

La desconfianza hacia las elecciones, que tejía su genealogía con el desconocimiento del MAS a los resultados del referéndum, se amplificaba en los ecos de una serie de irregularidades que tuvieron una alta cobertura mediática. Entre ellas, podemos mencionar las denuncias por el empadronamiento irregular en el interior del departamento de Beni, las denuncias del acarreo de votos en ocho municipios de Pando, el uso irregular del gobierno en recursos para la campaña, las denuncias de existencias de cédulas de identidad duplicadas, y los problemas con el padrón electoral. Sumado a esto, un número no menor de funcionarios del Servicio de Registro Cívico, encargados de la transmisión de resultados electorales, fueron removidos de sus puestos. Todos estos sucesos coadyuvaron a la instalación del significativo *fraude*, no exento, como dijimos, de operaciones mediáticas. La creación de veedurías y las formas de control ciudadano del voto para el día de la elección son un rasgo evidente de este clima de desconfianza preexistente al desarrollo de los comicios. En este contexto, la poca o nula propuesta política programática consolidada evidenciaba el eclipsamiento de la escena en la dicotomía gobierno/oposición.

En concreto, el mismo día de las elecciones, a las 19:40 horas, un suceso tomó por sorpresa la evolución del escrutinio. El flujo de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) suspendió la emisión al 83,76% de avance del conteo. Hasta ese instante, Evo Morales contaba con un 45,28% de los votos y Carlos Mesa con el 38,16%. Con esos resultados, la tendencia hacía posible la segunda vuelta. Esta opción era también avalada por diversas encuestadoras y proyecciones de resultados finales totales, que estimaban un 43% para Morales y un 39% para Mesa.

Cuando la transmisión se reanudó unas horas después, Morales ganaba la elección, tras obtener los votos necesarios en la primera vuelta. En medio de esta irregularidad, Morales se declaraba presidente electo, mientras Carlos Mesa daba declaraciones públicas acerca de que no iba a permitir el fraude y la manipulación de votos, y exigía la realización de una segunda vuelta electoral.

Ante la pérdida de legitimidad de las instituciones responsables, la OEA emergía como la voz autorizada para dirimir el pleito. Sin embargo, desde la oposición denunciaban el apoyo del secretario Almagro a Morales, y desde el MAS declaraban lo contrario. A su vez, cualquiera que haya seguido el rol de la misión de la Organización de Estados Americanos en el transcurso de esos días concluye que la OEA dejó mucho que desear en lo que respecta a seriedad y precaución. De hecho, apenas al día siguiente de las elecciones, la OEA publicaba una

profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas [...]. El TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica *drásticamente* el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral (OEA, 2019, énfasis propio).

Las consecuencias de esto eran previsibles: se instaló de manera inexorable la denuncia de fraude. Al día siguiente, Morales solicitaba a la misma organización realizar una auditoría vinculante, que

concluyó en una nueva acción apresurada de parte de la OEA. En este caso, arguyó la “razonabilidad” de convocar a segunda vuelta incluso antes de que el escrutinio oficial hubiese finalizado (Saltalamacchia Ziccardi, 2020).

En medio de estos “equivocos”, se inician múltiples movilizaciones, marchas. Asimismo, se convocó a una vigilia promovida por los Comités Cívicos –Santa Cruz y Potosí de manera inicial– y el CONADE. También se sumaron la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia [APDHHB]; organizaciones no gubernamentales, como Fundación Jubileo y Cáritas-Bolivia; organizaciones civiles; plataformas ciudadanas; la Asociación Departamental de Productores de Coca [Adepcoca] de los Yungas; el Colegio Médico de Bolivia; la Unión Juvenil Cruceñista [UJC]; y Resistencia Juvenil Cochala [RJC].

Durante las siguientes jornadas, la composición de la protesta se amplifica velozmente y miles de manifestantes se movilizan a los tribunales electorales en los nueve departamentos del país. Allí, el clima de convulsión social va *in crescendo* (llega incluso a enfrentamientos y quema de instituciones), sobre todo después de que el Tribunal Supremo Electoral anuncia la información preliminar sobre la posibilidad de una segunda vuelta entre Morales y Mesa. En los días siguientes, aparecen denuncias en medios de comunicación y redes sociales. Se difunden, por ejemplo, la aparición de papeletas fuera de los recintos electorales y la preexistencia de papeletas marcadas, que erosionaron aún más la credibilidad de los actores intervinientes en el proceso electoral.

El 23 de octubre, se crea la Coordinadora en Defensa de la Democracia, lo que da inicio a un paro nacional indefinido, promovido por las entidades cívicas y plataformas del país para exigir una segunda vuelta. Frente esto, Evo Morales sostuvo que los sucesos se trataban de una conspiración y de la puesta en marcha de un golpe de Estado por parte de la derecha con apoyo internacional. Los días subsiguientes preanuncian el desenlace. Al tiempo que condensan un conjunto de elementos del drama social, la tensión y los enfrentamientos políticos en las calles, el líder santacruceño Camacho toma la decisión

de autoerigirse en una especie de héroe épico para llevarle a Evo Morales su carta de renuncia, en la cual le encomienda su destino a Dios. Las declaraciones de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, donde solicitan la dimisión del gobierno, culminan con la salida de Evo Morales y Álvaro García Linera hacia el Chapare, territorio en donde, resguardados por las bases sociales, viajarán a México, luego de que este país les otorgue el asilo político.

En este contexto, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclama presidenta interina de facto y recibe de manos de los militares –y por fuera de todo accionar de la Asamblea Legislativa– la banda presidencial. De manera casi inmediata, le sigue al golpe de Estado la persecución de referentes políticos del MAS, el enfrentamiento con las organizaciones y bases sociales y las masacres de Sacaba y Senkata, como formas de acallar las resistencias al gobierno de facto. Junto con Áñez, llegaba al poder una élite política blanca y mestiza que no tardó en mostrar sus intenciones revanchistas, movida por un retorno al orden preexistente, un visceral rechazo a los símbolos identitarios de las poblaciones indígena-campesinas, como la *wiphala* y la hoja de coca que –al parecer, en un reduccionismo– identificaban con el MAS, y al que oponían los símbolos de la “civilización”, la biblia y el racismo como retórica argumental.

Las elecciones generales de 2020

Entre el golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019 y las elecciones de octubre de 2020, el MAS y las estructuras sociales que lo integran organizaron diversas instancias participativas de decisión política, características de la forma organizacional de sus bases, y que se denominan amplios. En estas instancias, se llegó rápidamente a decisiones significativas. En primer lugar, se ratificó el Pacto de Unidad como la principal instancia de dirección y coordinación política, y se relegó a la CONALCAM, creada en 2007 por Evo Morales, y que era entendida como una supraorganización cuyo propósito

era aglutinar obreros fabriles, cooperativistas y gremialistas. A su vez, en el marco de estos ampliados, se decidió el 11 de enero que la fórmula presidencial estaría encabezada por David Choquehuanca y secundada por Andrónico Rodríguez. Esta decisión fue apoyada por las estructuras organizativas que conformaban el Pacto de Unidad, pero, ciertamente, chocó con las intenciones de Evo Morales, quien convocó a una reunión en Buenos Aires para hacer su definición de los candidatos a la fórmula presidencial. Tras esta reunión en Argentina, la fórmula presidencial quedó encabezada por Luis Arce Catacora y secundada por David Choquehuanca. La fórmula fue posteriormente fue avalada por un ampliado de emergencia del Pacto de Unidad en El Alto, el 23 de enero. Así, las estructuras organizativas del MAS aceptaron, con muchas reservas, la decisión de Evo Morales.

De esta manera, el proceso de selección de candidaturas del MAS implicó la veloz activación de las estructuras organizativas originarias y la aceptación de una fórmula que no era la consensuada directamente por estas bases, pero, asimismo, consolidó el progresivo desplazamiento del protagonismo central de la figura de Evo Morales (Mayorga, 2020). El 18 de octubre de 2020 se realizaron las elecciones nacionales a candidatos a presidente,⁹ vice, diputados¹⁰ y senadores.¹¹ El proceso electoral estuvo marcado por el ritmo y desarrollo de la pandemia, así como también por las decisiones políticas tomadas por el gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez. Así, Bolivia enfrentaba el proceso electoral con la combinación de una triple crisis: la sanitaria, la política y la económica. Si se observan otros países, las crisis sanitaria y económica eran previsibles. Sin embargo, la crisis política no lo era. El gobierno de transición presidido por Jeanine Áñez fue producto de un golpe de Estado, pero a esta situación

⁹ Los binomios presidenciales eran los siguientes: 1. el MAS presentaba a Luis Arce y David Choquehuanca; 2. Creemos presentaba a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari; 3. Comunidad Ciudadana, a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza; 4. el Frente para la Victoria, a Chi Hyun Chung y Salvador Pinto; y 5. el Partido de Acción Nacional Boliviano, a Feliciano Mamani y Ruth Nina.

¹⁰ Se elegían 130 escaños.

¹¹ Se elegían 36 escaños.

ilegítima de llegada hay que agregarle la incapacidad de gestión política de la presidenta y sus ministros.

En este contexto, hay que destacar que las cifras de infectados a causa de la COVID-19 ascendían a 139.319 y contaban 8.407 fallecidos al momento del proceso electoral, lo cual ubicaba a Bolivia en el triste *ranking* del quinto país del mundo con más muertes por millón de habitantes, y el segundo de América Latina –por detrás de Perú–, según la Organización Mundial de la Salud (Mayer, 16/10/2020).

Ñez tuvo que responder por su incapacidad política, por su ineficiencia, por las represiones y por la pésima gestión de la política sanitaria en medio de una pandemia. Dicha gestión consistió, en un primer momento, en una cuarentena estricta y, con posterioridad, una cuarentena dinámica –al igual que otros países, como Costa Rica o Chile–, pero sin mejorar la infraestructura sanitaria ni aumentar la cantidad de unidades de camas para terapia intensiva. Las consecuencias de esta negligencia fueron rápidamente visibles. Al igual que Perú, en julio y agosto de 2020, Bolivia ofrecía imágenes de colapso sanitario, que se reflejó en ciudadanos que morían en la calle debido a que no tenían lugar donde enterrarlos en cementerios ni crematorios. Tampoco había responsabilidad o función pública que respondiera a estas necesidades. Asimismo, los escándalos de corrupción no tardaron en aparecer. En mayo de 2020, el entonces ministro de Salud tuvo que renunciar por sobrepagos en la compra de respiradores artificiales a una empresa española. Se trataba ciertamente, de un bien imprescindible en el contexto de la pandemia de COVID-19 (*Telam*, 20/05/2020).

La oposición política institucional a la gestión del gobierno de facto fue continua, particularmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ámbito dominado por el MAS. Lo mismo sucedió con actores de la sociedad civil, como la Central Obrera de Bolivia, sindicato de maestros rurales y urbanos, así como con un gran conjunto de organizaciones sociales adherentes al MAS y organizaciones indígena-campesinas. Entre las protestas, las principales se produjeron durante julio, lideradas por la COB, en la exigencia de educación,

trabajo y elecciones libres. Así, el 14 de julio se realizó una caminata de 12 km desde la ciudad de El Alto hasta La Paz. Con posterioridad, y debido al aplazamiento del calendario electoral, se realizaron bloques de carreteras, piquetes en las calles y nuevas movilizaciones.

Luego de considerables idas y vueltas, la fecha de las elecciones se fijó para el 18 de octubre de 2020. De los binomios presidenciales oficializados eran tres los de mayor relevancia. En primer lugar, se encontraba el candidato del MAS, Luis Arce Catacora, que fuera ministro de Economía durante las tres gestiones presidenciales encabezadas por Evo Morales. Lo secundaba David Choquehuanca, de origen aymara, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Internacionales desde 2006 hasta 2017. En segundo lugar, se hallaba Carlos Mesa, quien fuera vicepresidente (2002-2003), y luego presidente durante los años 2003-2005, producto de la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada, ante el ciclo de movilización social. Finalmente, el tercer candidato relevante era Luis Camacho, empresario y líder del Comité Cívico del departamento de Santa Cruz. En la fórmula iba junto a Marco Antonio Pumari, ex presidente del Comité Cívico de Potosí. La alianza entre los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí, que había sido altamente productiva para la organización de protestas contra la figura de Evo Morales, demostró ser, sin embargo, muy poco eficaz en el plano electoral. Esta oposición no pudo construir una política programática que superara el enclave regional. En esa imposibilidad influyó la forma de distribución de beneficios e impuestos.

Cabe destacar, además de las fórmulas y candidaturas, que la principal característica del escenario electoral boliviano en octubre de 2020 consistió en que Evo Morales no fuese candidato a presidente ni a ningún cargo electivo. En efecto, el regreso de Evo Morales a Bolivia, en calidad de presidente del MAS, se efectuó luego del triunfo de Arce Catacora. Todo esto deja abiertos importantes interrogantes acerca del rol que cumplirá a futuro Evo Morales en el escenario político boliviano.

La victoria electoral del MAS fue contundente e inapelable.¹² No solo ganó por amplio margen en los cargos de presidente y vicepresidente, sino que salió victorioso en diputados¹³ y senadores,¹⁴ y ganó en la mayoría de los departamentos y municipios. Con estos resultados se vuelve al escenario organizado en torno a la existencia de un partido predominante, que se produjo durante el segundo gobierno del MAS (2009-2014). No obstante, este panorama se da sin la presencia de Evo Morales, quien, en ese momento, estaba a cargo del Poder Ejecutivo, de la organización partidaria y de su organización gremial. A esto hay que agregarle una reconfiguración del campo político opositor, en el que las formaciones Unidad Nacional y Demócratas fueron reemplazadas por Creemos y Comunidad Ciudadana. En términos de perspectiva política, la formación opositora que tiene más capacidad de irradiarse es la que preside Luis Camacho. El joven empresario y representante conservador de Santa Cruz, luego de lanzar su campaña presidencial y no obtener un triunfo, salió electo gobernador de Santa Cruz con más del 55% de los votos en las elecciones de 2021. En términos de representación política, Camacho combina la figura del *outsider* respecto de la clase política establecida, con ideas conservadoras arraigadas en lo religioso. La creación de Creemos constituye la reacción de mayor relevancia del espacio de derecha frente a la victoria del MAS.

Reflexiones finales

El escenario electoral de octubre de 2019, el golpe de Estado y la victoria electoral del MAS en las elecciones presidenciales en 2020 constituyeron un punto de inflexión en la historia política del MAS. Los equívocos políticos, la movilización social y la alta conflictividad

¹² El MAS obtuvo un 55,11%, mientras que Comunidad Ciudadana alcanzó el 28,83%, y Creemos el 14% de los votos en las elecciones presidenciales.

¹³ Obtuvo 75 de un total 130.

¹⁴ Obtuvo 21 de un total de 36.

expresada en los enfrentamientos en diversos puntos del país durante más de 20 días evidenciaron que, a pesar de contar con ciertos apoyos claves, la relación de fuerzas medidas en el espacio público crecía en función de la exigencia, en primer lugar, de una segunda vuelta electoral, aunque rápidamente pasó a exigirse la renuncia de Evo Morales. El desenlace por medio de un golpe de Estado contó con el apoyo de las fuerzas militares y también –como es cada vez más conocido– con recursos internacionales y/o figuras de los gobiernos regionales. Los acontecimientos en el octubre boliviano encuentran sus explicaciones específicas en el corto plazo abierto desde el referéndum electoral de febrero de 2016, sobre todo en la configuración de dos polos políticos alrededor del eje oficialismo/oposición, pero, también, en el mediano plazo en las propias rupturas, fisuras y reconfiguraciones de las bases de apoyo político al gobierno.

La virulencia política del gobierno de facto a partir de noviembre de 2019, la ofensiva contra los símbolos político-identitarios de los sectores populares indígena-campesinos, y la negligencia de la gestión política sanitaria en el seno de la pandemia coadyuvaron a articular rápidamente los rechazos a este “régimen de transición”. Pese al manejo de los plazos electorales y los sucesivos aplazamientos para lograr la articulación de la derecha política, dividida entre varios candidatos, este sector no logró una fórmula capaz de posicionarse a escala nacional y disputar el voto ciudadano de manera conjunta. En medio de este panorama, las bases organizativas aliadas al MAS lograron rearticularse con la velocidad y eficacia características de esas estructuras del conflicto e incluso con la aguda perspicacia de –pese a las tensiones respecto de las fórmulas políticas de cara a las elecciones– aceptar la candidatura de Arce y Choquehuanca. Así, el MAS nuevamente colocaba dos candidatos capaces de dar continuidad a ejes constitutivos de la mayor tensión de su gobierno. Por un lado, se encontraba el ex ministro de Economía, responsable del sostenido crecimiento del PBI, basado en un modelo económico primario exportador, con fuerte intervención estatal para la captación de rentas. Por el otro, hallamos a David

Choquehuanca, una figura representante de las mayorías sociales indígenas, portavoz –tal y como quedó de manifiesto en el discurso inaugural de su mandato– de las narrativas del Buen Vivir y de las voces de las culturas milenarias.

Este retorno exitoso del MAS al gobierno, ahora sin la centralidad de Evo Morales Ayma, es realmente lo novedoso. La situación deja importantes interrogantes sobre cómo será el rol del *jefazo*. No obstante, resulta más intrigante aún cómo será el desplazamiento de la forma *decisionista* que caracterizó su gestión, aun cuando en reiteradas ocasiones debió dar marcha atrás a medidas significativas, ante el freno de la movilización social, el peso de organizaciones corporativas y el despliegue de demandas que podían ser procesadas dentro de los lineamientos políticos y económicos del régimen.

Bibliografía

Argento, Melisa (2018). Espejo de sal: Estructuras de la acción colectiva e integración territorial del proyecto de extracción e industrialización del litio en Bolivia. *Revista Estados y Comunes*, 2(7), 227-248. <https://www.iaen.edu.ec/>

Argento, Melisa; Slipak, Ariel y Puente, Florencia (2021). Litio, transición energética, economía política y comunidad en América Latina. Entre la acumulación por des-fosilización y las claves territoriales para una transición socio-ecológica justa. Informe resultado de Beca CLACSO: Ambiente, cambio climático y buen vivir. En prensa.

Arrestan y echan al ministro de Salud boliviano por presuntos sobrepagos en respiradores (20 de mayo de 2020). *Telam*. <https://www.telam.com.ar/notas/202005/466158-salida-ministro-salud-bolivia-pandemia.html>

Bolivia se divide a favor y en contra de la reelección de Evo Morales (22 de febrero de 2018). *France 24*. <https://www.france24.com/es/20180222-bolivia-protestas-reeleccion-evo-morales>

Bolivia: médicos marchan en Navidad y cumplen 33 días de paro (26 de diciembre de 2017). *Nodal*. <https://www.nodal.am/2017/12/bolivia-medicos-marchan-navidad-cumplen-33-dias-paro/>

El gobierno de Bolivia reveló nuevas pruebas sobre el envío de armamento de Macri durante el golpe (2 de agosto de 2021). *Nodal*. <https://www.nodal.am/2021/08/el-gobierno-de-bolivia-revelo-nuevas-pruebas-sobre-el-envio-de-armamento-de-macri-durante-el-golpe/>

Gandarillas Marco (2016). Bolivia: La década dorada del extractivismo. En Eduardo Gudynas et al. (Coords.). *Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo* (pp. 235-296). Barcelona: Entrepueblos.

Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes [GyBC] (2019). Triángulo del litio. Un área de disputa estratégica entre potencias globales en nombre de la transición energética. Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe. http://geopolcomunes.org/wp-content/uploads/2020/05/Triangulo_del_litio_Un_area_de_disputa.pdf

Mayer, Marianela (16 de octubre de 2020). El coronavirus causa en Bolivia una triple crisis: sanitaria, económica y, sobre todo, política. *Télam*. <https://www.telam.com.ar/notas/202010/525606-el-coronavirus-causa-en-bolivia-una-triple-tesis-sanitaria-economica-y-sobre-todo-politica.html>

Mayorga, Fernando (2020). El MAS-IPSP ante un nuevo contexto político: De “partido de gobierno” a “instrumento político” de las organizaciones populares. En Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez (coords.), *Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020)*, (pp. 1-35). La Paz: Friedrich Ebert Stiftung (FES).

OEA (21 de octubre de 2019). Declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia [Comunicado de prensa]. <https://www.oas.org/es/centro>

Saltalamacchia Ziccardi, Natalia (2020). La OEA en la elección presidencial de Bolivia: Problemas de credibilidad. *Análisis Carolina*. Fundación Carolina. <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/04/AC-13.2020.pdf>

Schneider, Alejandro M. (2020). Tensiones económicas, políticas y sociales durante los gobiernos de Evo Morales. Una interpretación sobre el golpe de Estado. *Anuario de historia*, 32, 1-25.

Stefanoni, Pablo (30 de noviembre de 2019). Bolivia después de Evo. *Sin permiso*. <https://www.sinpermiso.info/textos/bolivia-despues-de-evo>

Svampa, Maristella (2013). Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, 244, 30-46.

Zegada, María Teresa (2020). La crisis del sistema de representación política: Los partidos opositores al MAS en el interregno post y preelectoral (2019-2020). En Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez (coords.), *Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020)* (pp. 35-70). La Paz: Friedrich Ebert Stiftung (FES).